

Santiago, trece de septiembre de dos mil cuatro.

VISTOS:

En estos autos Rol 1166-98, caratulados “British Car S.A. con Rover Exports Ltda.”, sobre juicio ordinario, del Noveno Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de fecha 6 de junio de 2000, escrita a fojas 887 del Tomo II de estos autos, el Juez Titular de ese Tribunal, acogió la excepción de incompetencia del Tribunal opuesta por la demandada. En contra de esta resolución la parte demandante dedujo recurso de apelación.

Una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de fecha 28 de marzo de 2003, escrita a fojas 392 de este cuaderno, confirmó la referida resolución.

En contra de esta sentencia la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se funda este recurso de casación en el fondo esgrimiéndose que la sentencia impugnada ha incurrido en los siguientes errores de derecho, que se hacen incidir en la siguiente preceptiva:

a) Las normas jurídicas de interpretación de los contratos contenidas en los artículos 1562, 1563, 1564 y 1566 del Código Civil; y

b) El artículo 16 inciso final de la Ley 19.496 y artículos 138 y 222 del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto al primer grupo de normas, el recurrente sostiene que el problema de derecho se ha producido en la interpretación de dos cláusulas del contrato, objeto de la acción deducida, que indican cosas diferentes; por un lado, se establece un arbitraje en Londres y en inglés y por el otro lado, se dice que la jurisdicción de las Cortes Inglesas es no exclusiva. La sentencia impugnada ha señalado que si no se promueve el asunto en Inglaterra, la designación del árbitro lecorresponderá al Tribunal al cual se recurre, que no sea el inglés. Añade que los Sentenciadores han sostenido en su resolución que no es necesario interpretar el contrato, esto es, que no se aplican las reglas de interpretación del Código Civil. No obstante interpretó el contrato, como lo hizo, la propia resolución impugnada, pero con error de derecho, al acoger la excepción de incompetencia opuesta por la demandada.

En cuanto al segundo grupo de normas, señala el recurrente que también ha resultado vulnerado el inciso final del artículo 16 de la Ley 19.496 de 7 de

marzo de 1977, “Ley de Protección al Consumidor”, por cuanto tratándose de contratos de adhesión, pueden dejarse sin efecto los arbitrajes impuestos por la contraparte; y finalmente en cuanto a los artículos 138 y 222 del Código Orgánico de Tribunales; el primero porque las partes estipularon la competencia no exclusiva de los Tribunales ingleses y el segundo, porque para este caso en Chile, ni las partes ni la autoridad judicial, en subsidio, han designado un árbitro para conocer de la contienda.

SEGUNDO: Que para la conveniente resolución de este recurso deben tenerse presente los siguientes antecedentes que constan en el proceso:

a) Que British Car S.A. ha deducido demanda en contra de Rover Exports Ltda., en juicio ordinario, a fin que el Tribunal declare que no produce el efecto de terminar el contrato la declaración de Rover de fecha 31 de julio de 1997, avisando su término para el día 31 de julio de 1998; que como consecuencia de la declaración anterior, el demandante opta por exigir el cumplimiento del contrato y en subsidio, la declaración de su terminación por incumplimiento de Rover; que se condene a la demandada al pago de los perjuicios estimados en la suma de \$ 9.176.630.000 o la suma que se determine conforme al mérito del proceso, con costas.

b) Que esa demanda se fundamentó en el incumplimiento de las obligaciones contraídas por Rover Export Ltda., por instrumento privado de fecha 26 de abril de 1993, suscrito por las partes, llamado “Convenio de Distribución para la venta y servicios de los productos dentro del territorio de Chile”.

c) Que la demandada dedujo, dentro del término de emplazamiento, la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal del artículo 303 N°1 del Código de Procedimiento Civil, la que ha fundado en que las partes en el contrato han sustraído el conocimiento del asunto de la jurisdicción ordinaria y lo han sometido a la jurisdicción arbitral.

d) Que en efecto, en la cláusula 11ª letra k) del contrato, se pactó lo siguiente: **ARBITRAJE**: “Rover y el Distribuidor se esforzarán en todo momento de zanjar cualquier diferencia entre ellos, en lo relacionado con el contrato, debatiéndolo animadamente o de cualquier otra forma. Cualquier disputa que no pueda ser solucionada, será finalmente zanjada en el marco de las normas de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio por uno o más árbitros designados de acuerdo con las normas del Presidente en ese momento, del Comité Nacional de la Cámara Internacional de Comercio del Reino Unido.

Cualquier arbitraje se llevará a cabo en Londres y todos los procedimientos serán en Inglés”.

e) Que por su parte la letra l) de la misma cláusula dispone: **LEY** “Este contrato será en todos sus aspectos regulados e interpretado de acuerdo con la ley inglesa. Rover y el Distribuidor, por este acto se someten a la no exclusiva jurisdicción de las Cortes Inglesas”.

TERCERO: Que como antes se anticipó el recurrente ha sostenido que la sentencia vulneró las normas de interpretación de los contratos, establecidas en los artículos 1562, 1564 y 1566 del Código Civil, puesto que la aplicación correcta de estas normas habría llevado a los Jueces a concluir que lo pactado por las partes se refería a que sólo el arbitraje podía llevarse a efecto en Londres y que para fuera del Reino Unido no se había convenido el arbitraje, por lo que su conocimiento corresponde a la justicia ordinaria.

CUARTO: Que los jueces del mérito para acoger la excepción de incompetencia del Tribunal han entendido acertadamente que la cláusula arbitral pactada sustrae el conocimiento del asunto de la jurisdicción ordinaria y que la no exclusividad de los Tribunales Ingleses y que forma parte del pacto arbitral, está referida exclusivamente a que el juicio puede iniciarse en cualquier parte del mundo, siendo igualmente de conocimiento de la justicia arbitral; pero lo que no puede entenderse es que, si se inicia un juicio en otro lugar, sea competente la justicia ordinaria, pues con ello se estaría violando la cláusula arbitral y consecuentemente lo pactado por las partes en el contrato.

QUINTO: Que de lo expuesto resulta evidente que los jueces de fondo en uso de atribuciones que le son privativas establecieron la verdadera intención de los contratantes, extrayendo de la interpretación que hicieron de las cláusulas pertinentes del contrato, la cual constituye como bien se sabe, una cuestión fáctica de la sentencia que no es posible de ser revisada por la vía del presente recurso de casación de fondo.

SEXTO: Que como corolario de lo razonado se llega necesariamente a la conclusión que la sentencia atacada no infringió la preceptiva del Código Civil que se dice vulnerada, por el contrario, le dio correcta interpretación; y en cuanto a que se habría infringido el inciso final del artículo 16 de la Ley 19.497, también se rechaza puesto que no ha sido materia del debate la circunstancia que en la especie el contrato celebrado por las partes constituya un contrato de adhesión.

SEPTIMO: Que, finalmente, en relación a las normas que el recurrente

denuncia infringidas del Código Orgánico de Tribunales; en cuanto a la primera, sólo se refiere a las reglas de competencia en materia de territorio y la segunda, al concepto de árbitro; ninguna de las cuales puede sostenerse que ha sido vulnerada desde que precisamente se ha establecido en autos que la cuestión debatida debe ser resuelta por la Justicia Arbitral y que son las partes las llamadas a su designación, en el procedimiento que corresponda.

OCTAVO: Que en consecuencia, solo cabe rechazar el recurso en examen.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto por los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido a lo principal de fojas 393 de este cuaderno, por doña Laura Bañados Torres, en representación de British Cars S.A.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Ministro señor Hernán Álvarez García.

Rol N° 2612-03.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Álvarez G., Jorge Rodríguez A., y Jaime Rodríguez E., y Abogados Integrantes Sres. Oscar Carrasco A. y Enrique Barros B.

No firma el Abogado Integrante Sr. Barros, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.

Autorizado por el Secretario Sr. Carlos Meneses Pizarro.